

C.A. de Santiago

Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos antecedentes RIT 203-2024, RUC 2301347190-8, el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro se dictó sentencia por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por la que –en cuanto interesa– se condenó a Pablo Hernán Morales Salgado, a la pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de atentado contra la autoridad, previsto y sancionado en los artículos 261 Nro. 2 y 262 Nro. 2, ambos del Código Penal, cometido el 8 de diciembre de 2023, en la comuna de Peñalolén, de esta ciudad. Por no reunirse los requisitos de la Ley Nro.18.216, no se concede al sentenciado ninguna de las penas sustitutivas contempladas en dicha ley, por lo que deberá cumplir efectivamente la pena corporal impuesta, la que se le comenzará a contar desde el día que se presente o sea habido, sirviéndole de abono, los dos días que permaneció con motivo de esta causa.

En contra de esa decisión la abogada defensora Nathaly Skoljarev Guzmán, deduce recurso de nulidad invocando la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por estimar que en la sentencia se incurrió en una errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo al no acoger la petición de la defensa, en relación con aplicar la circunstancia atenuante de responsabilidad penal establecida en el artículo 11Nro. 5.

El 19 de noviembre pasado se verificó la audiencia respectiva para conocer del arbitrio intentado, con la concurrencia y alegatos de la defensa del acusado y del Ministerio Público. Luego de la vista del recurso se citó a la lectura del fallo para el día de hoy.

Considerando:

Primero: Que el recurso de nulidad formalizado por la defensa del condenado refiere, respecto de la causal esgrimida, a saber, aquella establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, que al no acoger la solicitud de la defensa en cuanto a reconocerle la circunstancia atenuante del artículo 11 Nro. 5 al acusado. Aduce que el encartado, al momento de declarar ante el tribunal manifestó que su actuar se debió a que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHBEXRMKJXN

al tiempo de la detención de su hijo menor de edad, se enteró que Carabineros lo había golpeado con puñetazos, luego de ver que un funcionario había empujado a su pareja Evelyn, quien a la época de los hechos estaba embarazada, y que cuando llegó el padre de aquel a preguntar qué sucedía también recibió como respuesta un puñetazo por parte de Carabineros. Manifiesta que esta situación lo enfureció haciéndolo actuar con arrebató.

Por lo anterior, a juicio de la defensa el fallo le genera un grave perjuicio a su parte, toda vez que el no reconocer la circunstancia atenuante citada incidió en la determinación de la pena a imponer.

Concluye pidiendo que “[...] se invalide la sentencia condenatoria dictada en cuanto al considerando Undécimo, reconociendo la circunstancia modificatoria de responsabilidad del artículo 11nº5, por lo que se solicita que se dicte sentencia de reemplazo con la pena de 300 días de presidio menos en grado mínimo, o lo que su Señoría ilustrísima estime en derecho y justicia, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena” (sic).

Segundo: Que, enfrentados al arbitrio en examen resulta preciso apuntar que, sobre el concepto y definición de este tipo de recursos, la Corte Suprema ha expresado que “[...] es un medio de impugnación legal en favor de los intervinientes del juicio oral en razón del especial agravio que les provoca la sentencia, o su tramitación, al infringirse sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile, vigentes, en que se cometa una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo o se incurriera en algún motivo absoluto de nulidad expresamente reconocido por la ley, con el objeto que la respectiva Corte de Apelaciones o, excepcionalmente, la Corte Suprema cuando ello corresponda, anule el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta. Se desprende de lo dicho que sus características fundamentales son las propias de un recurso extraordinario y de derecho estricto, en razón de los cuales se persigue la invalidación de la sentencia o del juicio oral o de ambos, sólo por causales expresamente definidas en la ley cumpliendo además algunas formalidades legales” (Rol Nro. 964-03).

Tercero: Que en relación con el vicio de invalidación antes mencionado la misma Corte Suprema ha puntualizado que “[...] según las



directrices fijadas por la doctrina y la jurisprudencia, la presente causal de invalidación del juicio oral y de la sentencia concurre únicamente en los siguientes casos: a) cuando existe una contravención formal del texto de la ley, es decir cuando el juzgador vulnera de manera palmaria y evidente el texto legal; b) cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de una sentencia; y c) cuando existe una falsa aplicación de la ley, situación que se verifica cuando el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resulta realmente pertinente su aplicación. En este sentido, los autores Horvitz y López expresan que: ‘Conforme a la discusión legislativa de la norma pertinente en el Senado, el objetivo al que apunta sería el respeto de la correcta aplicación de la ley (elemento que informa el recurso de casación clásico, orientado a que el legislador tenga certeza de que los jueces se van a atener a su mandato), pero ampliado en general a la correcta aplicación del derecho, para incorporar también otras fuentes formales integrantes del ordenamiento jurídico’’. (CS Nro. 2095–2011). Sobre este punto también se ha anotado que “[e]l error en la aplicación del Derecho a que se refiere el precepto, de acuerdo con la doctrina, puede provenir: ora de la infracción formal de la ley, ora de su falsa aplicación, ora de su errónea interpretación”. (Juan Cristóbal Núñez Vásquez, “Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral”, Ed. Jurídica de Chile, año 2009, p. 340).

Asimismo, hay consenso en que esta es una causal puramente normativa, de derecho estricto, y por lo mismo, el análisis y decisión del recurso no abarca los hechos ya fijados y determinados en la sentencia, los que resultan inamovibles, debiendo ser íntegramente respetados por el tribunal revisor.

Cuarto: Que, en la forma como viene planteada, la causal de nulidad alegada importa un reproche ante la falsa aplicación de la ley, situación que se verificaría por haber dejado el juzgador de aplicar la minorante de responsabilidad penal prevista en el numeral 5° del artículo 11 del Código Penal, no obstante, a entender de la recurrente resultada pertinente su aplicación. Esta norma señala expresamente que configura la atenuante “5°La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebató y obcecación”.

Luego, sobre la procedencia de tal atenuante en el caso de que se trata, solicitada que fuera al tribunal del grado, aquél la denegó razonando



en el párrafo tercero del motivo undécimo del fallo censurado en los siguientes términos: “[q]ue se rechaza la petición de la defensa del acusado Morales Salgado, de reconocer la atenuante establecida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal, por cuanto se estimó que no existe mérito alguno para acogerla; siendo improcedente en ese caso una rebaja de la pena, por beneficiarle solo una atenuante, se hace innecesario resolver la petición de una pena sustitutiva de libertad”. Adicionando que “[e]s preciso, además señalar, que el reconocimiento de dicha minorante debió solicitarse en el alegato de clausura, por cuanto no se trata de una circunstancia ajena al hecho punible y sus fundamentos debieran encontrarse en la prueba rendida, puesto que en la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, solo corresponde hacer valer aquellas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal de carácter personal. Sin embargo, la defensa, aparte de no entregar argumento alguno que justifique un análisis de una posible existencia de la minorante, es evidente que luego de analizar la prueba no hay ningún antecedente que justifique su reconocimiento desde que la versión del acusado fue totalmente descartada”.

Quinto: Que, sentado lo anterior, debe tenerse presente, primeramente, que las argumentaciones de la defensa en torno a la circunstancia atenuante cuestionada dicen relación con un aspecto de interpretación de la norma en concordancia con las circunstancias de hecho acreditadas en el juicio, y aun cuando la defensa disienta de aquélla, siendo la efectuada por los juzgadores una interpretación plausible y razonable y sustentada en la prueba, la causal de nulidad deducida no puede prosperar.

Relacionado con lo anterior, además, la jurisprudencia ha señalado que el reconocimiento de las circunstancias morigerantes de responsabilidad penal está entregado por ley al tribunal de la instancia, que es el llamado a ponderar su procedencia según el mérito del proceso, lo que resulta de toda lógica, pues es ante el cual se ha rendido la prueba, el que ha tenido contacto e intermediación con la misma y con los intervinientes, es el que ha aquilatado su capacidad para acreditar hechos y el que por tanto, puede medir si se configuran las exigencias de las circunstancias modificatorias de responsabilidad. De ello se sigue que no podría esta Corte revisar la procedencia de atenuantes adicionales como la del artículo 11 número 5 del Código Penal, sugerida en el recurso, imponiéndosela sin motivo al tribunal



que dictó el fallo. Máxime cuando tal circunstancia debe sustentarse en supuestos fácticos que no han quedado establecidos en la sentencia que se revisa, y sin que le esté permitido a esta Corte en el presente estadio procesal incorporar hechos no fijados en la etapa pertinente.

Sexto: Que, con todo, aún debe anotarse que las argumentaciones vertidas en el recurso no dicen relación propiamente con la aplicación errónea de la norma citada, sino más bien se refiere a la interpretación que los sentenciadores dieron a los hechos acreditados para no dar por configurada la atenuante, al concluir que no se demostró que el condenado, al momento de la ejecución del delito, actuó con su voluntad comprometida por arrebató u obcecación. Así, lo pretendido por el recurrente es sustituir dicha valoración por aquella más acorde a sus pretensiones, lo cual excede con creces el contenido de esta causal desde que pretende modificar por esta vía los supuestos fácticos que los jueces de la instancia asentaron en el fallo en alzada con relación a esta minorante.

De tal manera que los sentenciadores del tribunal oral en lo penal no incurrir en infracción en la aplicación de la ley al desestimar la atenuante en comento.

Séptimo: Que, consecuentemente, en mérito de lo expresado se hace ineludible concluir que la sentencia que se impugna no ha incurrido en el vicio previsto en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal que se le atribuye, razón por la cual la nulidad impetrada no puede prosperar.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la abogada defensora penal pública, Nathaly Skoljarev Guzmán, en contra de la sentencia definitiva pronunciada el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en los autos RIT 203-2024, RUC 2301347190-8, por la cual se condenó a Pablo Hernán Morales Salgado, a la pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de atentado contra la autoridad, previsto y sancionado en los artículos 261 Nro. 2 y 262 Nro. 2, ambos del Código Penal, cometido el 8 de diciembre de 2023, en la comuna de Peñalolén, de esta ciudad, declarándose, en consecuencia, que ella no es nula.



Redacción de la ministra Romy Grace Rutherford Parentti.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol Corte Nro. 5966-2024 (Reforma Procesal Penal).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHBEXRMKJXN

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P., Romy Grace Rutherford P. y Ministra Suplente Lidia Poza M. Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHBEXRMKJXN